

Santiago, dos de mayo de dos mil veinticinco.

**VISTOS:**

En estos autos, el Ministro en Visita, señor Álvaro Mesa Latorre, con fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dicta sentencia definitiva en la cual, en el aspecto penal, condena a Juan Alfonso Prado Ponce, como autor del delito de detención ilegal en la persona de Daniel Mauricio Sepúlveda Contreras, cometido en el mes de septiembre de mil novecientos setenta y tres, en la ciudad de Toltén, a la pena de tres años de reclusión menor en su grado medio. Por otra parte, el referido fallo condena a Carlos Hernán Moreno Mena, en calidad de autor del delito de homicidio calificado cometido en contra de la referida víctima, en la misma época y lugar, a la pena de trece años de presidio mayor en su grado medio. En ambos casos, además de las penas corporales, les aplica las accesorias legales correspondientes, el pago de las costas de la causa y decreta su cumplimiento efectivo al no concederles penas sustitutivas.

En el mismo fallo, en el plano civil, el referido Ministro Instructor, luego de rechazar las excepciones interpuestas por el Fisco de Chile, con costas, accede a las demandas formuladas en su contra por María Soledad y Ramiro, ambos Sepúlveda Contreras, condenándolo, al pago de cien millones de pesos (\$100.000.000) a cada uno, suma reajutable conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, más intereses.

Impugnada esa decisión, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a aprobar y confirmar la decisión en el aspecto penal y modificar la condena civil, rebajando el monto por el cual fue condenado al Fisco de Chile, por concepto de daño moral, a la suma de setenta millones de pesos (\$70.000.000) para cada uno de los demandantes civiles.



Finalmente, contra esta última sentencia y únicamente en el extremo penal, la defensa de Juan Alfonso Prado Ponce dedujo recurso de casación en el fondo, el que pasa a examinarse, respecto del que se ordenó traer los autos en relación.

**Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, previo a entrar al análisis del recurso, conviene precisar aquellos hechos asentados en la instancia, los cuales están puntualizados en el considerando décimo del fallo de primer grado y que el Tribunal de Alzada mantiene, a saber:

*“A.- Que luego del 11 de septiembre de 1973 producto de una orden emanada en todo el país, las instituciones armadas y de orden, la Tenencia de Carabineros de Toltén aumentó su dotación, al replegarse unidades inferiores a ella, comenzando a ser dependiente la 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufquén. Como consecuencia de lo anterior, hubo una separación de funciones en ambas unidades policiales; quienes al mando de los respectivos oficiales, y junto a su personal de confianza, efectuaron diversos operativos terrestres en los cuales se procedía a detener e interrogar a personas que poseían vinculaciones de carácter político o de relevancia social; como asimismo a aquellas que eran calificadas como extremistas y eran denunciadas ante las autoridades locales; las cuales eran detenidas para finalmente ser conducidas hasta una dependencia especialmente habilitada para los detenidos políticos al interior de la 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufquén, según se detallará en el punto C de esta presentación.*

*B.- Que en cuanto a la unidad del mando, la Tenencia de Carabineros de Toltén quedó conformada por su jefe, el sargento 1° Manuel Jesús Verdugo Reyes, quien hasta esa fecha se desempeñaba como jefe del Retén de la*



localidad de Queule, y por otros funcionarios policiales, entre los que se encontraban Juan Alfonso Prado Ponce, conductor de la unidad y el sargento 1° Haroldo Hernández Reyes (fallecido según consta a fs. 1.120 (Tomo IV)); el primero de los cuales y en compañía del segundo y/o de Manuel Jesús Verdugo Reyes, entre otros, procedían a detener y trasladar a los detenidos políticos hasta las dependencias de la unidad; para posteriormente conducirlos al recinto detallado en el párrafo precedente, al interior de la 5° Comisaria de Carabineros de Pitruftuén. Todo, por orden del Capitán Ramón Sergio Callis Soto (fallecido según consta a fs. 1.117 (Tomo IV)) de la 5° Comisaria de Carabineros de Pitruftuén.

**C-** Que a su vez, Ramón Sergio Callis Soto (fallecido según consta a fs. 1.117 (Tomo IV)), al mando de dicha unidad policial y de sus unidades inferiores, organizó y coordinó al interior de esa Comisaria un grupo especial de carabineros compuesto por funcionarios de la unidad, entre los que se encontraba un teniente de nombre Carlos Hernán Moreno y un suboficial Mayor llamado Reinaldo Alberto Lukowiak Luppy (procesados a fs. 1.381 y siguiente de autos) quienes bajo las órdenes del ya referido oficial procedían a detener, sin orden judicial aparente, a personas consideradas como opositoras al Régimen Militar; las que eran aprehendidas únicamente por, su filiación política y conducidas hasta el segundo piso de las caballerías de la 5° Comisaria de Carabineros de Pitruftuén; lugar donde muchos de estos detenidos fueron torturados físicamente y, al que sólo podían ingresar los miembros de este grupo especial. Desconociéndose hasta la fecha el paradero de muchos de aquellos detenidos.

**D.-** Que en el mes de septiembre de 1973 y tras el día 11 del mismo mes, Daniel Mauricio Sepúlveda Contreras, 23 años, estudiante de la



*Universidad de Chile, profesor de Química del Liceo Nueva Toltén, sin militancia política conocida, fue detenido en horas de la noche por personal de la Tenencia de Carabineros de la misma comuna. Ésta se realizó en la pensión donde residía, ubicada en calle Los Copihues s/n de dicha comuna, en presencia de la dueña de casa doña Teresa Rodríguez, y del inspector del establecimiento donde el se desempeñaba, de nombre Nelson Araneda, quien también pagaba pensión en ese lugar. Entre sus aprehensores se encontraba el Sargento 1° Manuel Jesús Verdugo Reyes (procesado a fs. 819 de esta causa y sobreseído definitivamente de esta causa a fs. 1.005 por razones de salud) quien como se dijo, en ese momento dirigía la tenencia de Toltén; el Sargento Haroldo Hernández Reyes (fallecido según consta a fs. 69 (Tomo I)); y el carabinero Juan Nolberto Caamaño Toledo (fallecido según consta a fs. 72 (Tomo I)), de la misma unidad policial. Confirma la detención anterior, una denuncia informal ante Carabineros de Toltén realizada por el inspector ya mencionado, por supuestas vinculaciones políticas de Sepúlveda Contreras.*

*E.- Que al cabo de unas horas, funcionarios de Carabineros de Toltén se dirigieron nuevamente hasta el inmueble donde pagaba pensión Sepúlveda Contreras, con el objeto de retirar cada una de las pertenencias de aquel. Éstas fueron entregadas por la hija de la dueña de la pensión a los funcionarios de la Tenencia ya mencionada, en presencia de un menor de edad, nieto de la Sra. Rodríguez, de nombre Jorge Lito Peña Erices.*

*F.- Que luego de interrogarlo e imputarle un plan para asesinar a los Carabineros de Toltén, Sepúlveda Contreras fue trasladado en una camioneta -que en esa época había sido incautada a un servicio público para las labores de los uniformados- por el único carabinero que sabía conducir en dicha unidad policial - de nombre Juan Alfonso Prado Ponce (procesado a fs. 819 y*



*siguientes de esta causa), quien además era designado oficialmente para esas labores- y el Sargento 1° jefe de la Tenencia de Toltén Manuel Jesús Verdugo Reyes (procesado a fs. 819 y sobreseído definitivamente de esta causa a fs. 1.005 por razones de salud) quienes trasladaron a la víctima hasta la 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufquén.*

*G.- Que Daniel Sepúlveda fue ingresado a la 5° Comisaria de Pitrufquén y conducido hasta el segundo piso de las caballerizas de dicha unidad, lugar donde, como se dijo, a partir del 11 de septiembre de 1973 mantuvieron en calidad de detenidos a todas las personas conducidas por motivos políticos. En este lugar Sepúlveda Contreras fue visto por otras personas detenidas, entre ellos un profesor de Inglés de nombre Oscar Seguel Jofré (el cual había sido detenido por el Teniente y el Suboficial de Carabineros indicados en el punto C- quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como director de la escuela N° 34 "Villa Donguil" y era delegado del gobierno en ese sector, razones por las cuales conocía a Daniel Sepúlveda. Incluso en aquellos momentos en que ambos se encontraban en calidad de detenidos, pudo observar el mal estado físico del estudiante, y oír sus quejas producto de lo mismo; además el joven logró comentarle que estaba haciendo su práctica de profesor en Toltén. Sin embargo, a los pocos minutos Daniel Sepúlveda Contreras dejó de quejarse, pudiendo observar que aquel joven había fallecido a su lado. Que tras lo cual, los carabineros que allí se encontraban, lo envolvieron en una frazada, sacándolo de la dependencia al cabo de media hora y no regresando nuevamente al lugar.*

*H.- Que a raíz de lo anteriormente expuesto, la madre de Sepúlveda Contreras, doña Hilda Contreras Lara, viajó desde Santiago hasta la comuna de Toltén a fin de averiguar lo ocurrido con su hijo. En dicha comuna, concurrió*



*hasta la Tenencia de Carabineros de Toltén, donde le manifestaron que su hijo había sido trasladado hasta la Comisaría de Pitruftuén. Lugar al que posteriormente concurrió y en donde se le exhibió el libro de detenidos de la época, verificando que efectivamente éste había permanecido detenido en ese lugar, no existiendo una orden de egreso ni un supuesto traslado a otra unidad policial. A pesar de lo anterior realizó averiguaciones en las distintas unidades de Carabineros de la región, no obteniendo una respuesta clara sobre lo acontecido con su hijo.*

*I.- Que tras los episodios descritos precedentemente, la madre de Daniel Sepúlveda Contreras jamás volvió a tener noticias sobre su destino, manteniéndose en la actualidad sólo el relato existente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el que da cuenta de la desaparición tras la citada detención; pudiéndose comprobar hasta ahora, como se ha dicho, que Daniel Mauricio Sepúlveda Contreras falleció en presencia de don Oscar Manuel Seguel Jofré.*

*J.- Por último, hasta la fecha, ningún funcionario público de Carabineros de la 5° comisaria de Pitruftuén, que se desempeñaban en la época de los hechos, ha proporcionado algún antecedente a la autoridad respectiva en razón de lo sucedido con el cuerpo de Daniel Sepúlveda Contreras, manteniendo hasta el día de hoy el ocultamiento de todo tipo de antecedentes sobre su muerte.”*

A juicio de los sentenciadores de instancia, tales hechos descritos configuran la existencia de la detención ilegal y homicidio calificado en la persona de Daniel Mauricio Sepúlveda Contreras regulados en los artículos 148 y 391 N°1, circunstancias 1° y 5° del Código Penal, ambos en carácter de lesa humanidad.



**SEGUNDO:** Que, en contra de la decisión de segundo grado, la defensa del sentenciado Prado Ponce dedujo un recurso de casación en el fondo, en donde realiza diversas alegaciones que apuntan tanto a la absolución de su representado, a la inexistencia del hecho ilícito y su falta de participación, así como también disputa el reconocimiento de la minorante de responsabilidad del artículo 211, en relación con el artículo 214 del Código de Justicia Militar. Cuestiona también la pena aplicada, denunciando la infracción de los artículos 103, 11 N° 6 y 9, 12 N° 8 del Código Penal y la procedencia de penas sustitutivas, citando como vulnerados los artículos 18 del estatuto punitivo en relación con los artículos 4 y siguientes de la Ley N° 18.216 y artículo 1 de la Ley N° 19.828 y artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República.

**TERCERO:** Que, tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el recurso de casación constituye una vía de impugnación de derecho estricto en cuanto impone al recurrente el cumplimiento de determinadas formas legales. Así lo establece el artículo el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, aplicable según la remisión expresa que contiene el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal a las disposiciones previstas en el párrafo 1° y 4° del Título XIX del Libro III del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, según la primera de estas disposiciones, el libelo que contenga el recurso deberá expresar en qué consiste el o los errores de derecho, en los que se afirma habría incurrido la sentencia y, además, de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo. No bastará, en consecuencia, la mera aseveración del error de derecho reclamado, ni tampoco la sola enunciación de normas legales, sino que debe precisarse con suficiente claridad y concatenamiento lógico-argumental en qué consiste la aplicación errónea de la ley penal, y exponerse,



además, cómo el vicio denunciado constituye una o más de las causales taxativas que designa el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.

Esta exigencia obliga entonces a los impugnantes no sólo a expresar ordenada y lógicamente los presupuestos indicados, sino, además, les impedirá proponer motivos de nulidad contradictorios unos de otros, pues ello implicaría trasladar indebidamente al fallador, la referida carga procesal a efectos de determinar si existe uno o más de los vicios alegados.

**CUARTO:** Que, conforme a lo expuesto, un recurso de casación en el fondo que incurra en tales omisiones o contradicciones procesales nunca podrá prosperar, situación que acontece con el arbitrio en análisis, por cuanto la apoderada del recurrente no vincula sus protestas en ninguna de las causales de casación en el fondo que, taxativamente establece el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, de tal manera que el arbitrio padece un defecto infranqueable pues, esta clase de recurso, como se dijo, se caracteriza por ser de derecho estricto, por lo que únicamente puede basarse en los motivos que prevé la aludida disposición legal y al no hacerlo, no cabe siquiera entrar en el análisis de fondo de los tópicos planteados sino derechamente rechazar el recurso planteado.

**QUINTO:** Que, no obstante, el rechazo del arbitrio de casación en el fondo, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de un vicio de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual -en el aspecto penal- confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyo los fundamentos de aquella que se revisó, con lo cual, obvió el yerro que se constata en lo que se refiere a la aplicación de la Ley N° 18.216.

**SEXTO:** Que, para estos efectos, resulta relevante lo que dice relación con los motivos que se tuvieron en cuenta para denegar las penas sustitutivas





a las penas privativas o restrictivas de libertad que contempla la Ley. En efecto, el fallo del tribunal de primera instancia tuvo en consideración para ello, por una parte el informe desfavorable del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, de 31 de mayo de 2019, que concluye que la concesión de alguna de las penas sustitutivas no sería una alternativa eficaz para conseguir la modificación de las necesidades criminológicas del acusado, así como también consideró que, por aplicación del control de convencionalidad, conforme a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a los estándares normativos e interpretativos sobre derechos humanos, no es posible otorgarle ninguno de los beneficios de la Ley N° 18.216.

En tal sentido, cabe señalar que, si bien el informe presentencial elaborado por Gendarmería no sugiere la sustitución de las penas privativas de libertad al encausado, debe considerarse que el artículo 4 de la Ley N° 18.216 no condiciona el otorgamiento de la remisión condicional a la elaboración de ese informe o a que éste sea favorable para el condenado, sino que ello debe determinarse atendiendo, junto a los demás extremos que prevé, a si *“los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitieren presumir que no volverá a delinquir”*, y en la especie si bien Prado Ponce registra una condena anterior en su extracto de filiación, lo cierto es que respecto de aquella ya han transcurrido los plazos que establece la ley para efectos de ser considerada, a lo que se suman sus circunstancias personales, principalmente su edad, condiciones que permiten presumir que no volverá a cometer delitos como el establecido en esta causa u otros.

Respecto de la improcedencia de los beneficios que establece la Ley en



comento, cabe señalar que los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos, no prohíben el otorgamiento de beneficios alternativos o penas sustitutivas al cumplimiento de penas privativas de libertad a los condenados por delitos de lesa humanidad. Si bien la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que las penas impuestas deben ser proporcionales a la gravedad de las violaciones a los Derechos Humanos sancionadas, así como declara que no son compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos aquellas sanciones ínfimas o ilusorias o que signifiquen sólo una apariencia de justicia, en la especie, la pena sustitutiva de tres años de remisión condicional de la pena, no aparece desproporcionada ni meramente simbólica, porque sin desconocer la gravedad de los hechos imputados al referido sentenciado, no puede pasarse por alto la naturaleza y característica de la participación atribuida en esos hechos arriba revisada, así como su edad.

**SÉPTIMO:** Que, atendido lo precedentemente expuesto, es posible concluir que, en ese único extremo, el fallo no ha sido extendido en la forma dispuesta por la ley, conformando con ello un motivo de casación de forma, en particular la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numerando 4º del artículo 500 del mismo cuerpo legal, respecto a la exigencia formal de contener las consideraciones necesarias relativas a los hechos que fundan o descartan la responsabilidad y extensión con respecto a los procesados así como de su participación, requisito que se hace extensivo a la concesión de penas sustitutivas, por cuanto, si bien se ha entendido que su concesión es facultativa de los jueces de fondo, lo cierto es que todo lo pertinente a la procedencia o no del referido beneficio, se incorpora



a la sentencia y se encuentra ligado indefectiblemente a la condena, dado que la pena privativa de libertad, puede quedar expuesta a mantenerse en suspenso, por lo que su denegación debe necesariamente encontrarse adecuadamente fundada.

En la especie, si bien el fallo en examen señala los motivos por los cuales no procedería alguna de las penas sustitutivas que contempla la Ley N° 18.216, lo cierto es que aquellos resultan del todo insuficientes conforme a lo que se señaló precedentemente, sobre todo considerando que la exigencia del requisito de contar con un informe favorable no se encuentra contemplado en la ley y, además, por cuanto su procedencia no se encuentra prohibida respecto de los delitos de lesa humanidad, por lo que el control de convencionalidad que invoca el juez de la instancia no resulta motivo suficiente ni menos fundado para negar su aplicación.

**OCTAVO:** Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, puede este tribunal, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a Derecho, únicamente en lo que se refiere a la procedencia de la aplicación de la Ley N° 18.216, lo cual representa el motivo para proceder de oficio.

Y, de conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 535, 546



y 547 del Código de Procedimiento Penal; y, 775 del Código de Procedimiento Civil, se **RESUELVE**:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo, interpuesto en favor del condenado Juan Alberto Prado Ponce, presentado por su defensa, doña Carolina Olave Espinoza, en contra de la sentencia definitiva de uno de septiembre de dos mil veintitrés, pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos quinto a séptimo, se invalidará de oficio la referida sentencia, únicamente, en la parte indicada en dichos motivos, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Lo anterior, **fue adoptado con el voto en contra de la Ministra señora González y el Abogado Integrante señor Gandulfo**, quienes estuvieron únicamente por rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa de Juan Alfonso Prado Ponce, como se razona hasta el motivo Quinto de este fallo, y no ejercer la facultad oficiosa de casar de forma la decisión que se revisa, por no darse los presupuestos del inciso segundo del artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, desde que la nulidad de fondo fue correctamente desestimada y, por ende, no se está en la hipótesis del inciso primero del artículo 775 del mismo texto legal.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Tavorari y la disidencia por sus autores.

**Regístrese.**

**Rol N°236.784-2023.**



Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por el Ministro Sr. Manuel Antonio Valderrama R., las Ministras Sras. María Teresa Letelier R. y Jessica González T., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavolari G. y Sr. Eduardo Gandulfo R. Santiago, 02 de mayo de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO  
Fecha: 02/05/2025 14:09:39

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER  
RAMIREZ  
MINISTRA  
Fecha: 02/05/2025 14:09:40

JESSICA DE LOURDES GONZALEZ  
TRONCOSO  
MINISTRA  
Fecha: 02/05/2025 14:34:22

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 02/05/2025 14:09:41

EDUARDO NELSON GANDULFO  
RAMIREZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 02/05/2025 14:09:42



En Santiago, a dos de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, dos de mayo de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos 41°, 42° y 43°, que se eliminan.

De fallo de casación, se reproducen las reflexiones quinta a séptima.

**Y, teniendo, además, presente:**

1°) Que, atendida la penalidad impuesta —tres años—, resulta procedente la remisión condicional de la pena, pues el enjuiciado cumple con los requisitos que establece el artículo 4 de la Ley 18.216, por lo cual se dispondrá aquella, teniendo para ello en consideración, además de lo ya razonado, la edad del sentenciado puesto que, como es bien sabido, por mandato del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la propia Constitución, *“así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”*.

Al respecto, resulta pertinente señalar que, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, fue aprobada por el Congreso Nacional el 9 de marzo, promulgada el 1 de septiembre y publicada el 7 de octubre, todo del año 2017 -antes de la dictación de la sentencia recurrida, el año 2023- y, por tanto, dado el tenor del citado artículo 5, inciso segundo, los tribunales nacionales tienen el deber de interpretar y aplicar las disposiciones legales del ámbito interno de modo



coherente al respecto y promoción de los derechos que consagra la mencionada Convención la que según su Preámbulo, reafirma *“el valor de la solidaridad y complementariedad de la cooperación internacional y regional para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor.”*

2º) Que la examinada Convención en su artículo 13 establece que: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

3º) Que, en el caso en estudio, el recurrente es “persona mayor” según la propia definición que entrega la mencionada Convención en su artículo 2, esto es, *“Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor”*. En concordancia con lo anterior, el inciso segundo del artículo 1 de la Ley N° 19.828 que Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, establece que *“Para todos los efectos legales, llámase adulto mayor a toda persona que ha cumplido sesenta años”*.

4º) Que, entonces, con la sustitución de pena privativa de libertad por la de remisión condicional, en el caso de marras se logra por una parte, reafirmar la vigencia de la norma penal transgredida con las conductas imputadas al acusado, cumplir y ajustarse a los distintos fines que se esperan de la sanción penal y, asimismo, honrar el compromiso del Estado con la investigación, sanción y reparación de graves violaciones a los Derechos Humanos, pero por





otra parte, también respetar y promover los derechos del encartado como persona mayor, consagrado en la Convención ya referida.

5°) Que, en síntesis, la normativa internacional de los derechos humanos, interpretada en su conjunto, no prohíbe ni excluye la sustitución de pena privativa de libertad por la de remisión condicional, aun tratándose de delitos que deben calificarse como violaciones a los derechos humanos, sino que constituye una herramienta mediante la cual el órgano jurisdiccional puede dar un prudente y razonado cumplimiento a los deberes que esa misma normativa consagra, como arriba se ha explicado.

6°) Que, en este orden de cosas, las reflexiones precedentes permiten descartar el informe fiscal emitido, en aquella parte que propone confirmar el fallo en lo que descarta.

Por estas consideraciones, se declara que:

I.- Se **confirma** la sentencia apelada de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, **con declaración** que, reuniéndose en este caso los requisitos del artículo 4 de la ley N°18.216, se sustituye al sentenciado **JUAN ALFONSO PRADO PONCE** el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la pena de **remisión condicional**, por igual término que el de la pena privativa de libertad que se sustituye quedando sujeto a las condiciones de las letras a), b), y c) del artículo 5 de la Ley N° 18.216 durante ese período.

Si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada, el condenado cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta o, en su caso, se la remplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas, ello según lo resuelva el señor Juez encargado de la ejecución.



En caso de decretar el ingreso efectivo, se someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva y los días que permaneció privado de libertad por la presente la causa, esto es, entre el día 11 de julio al 17 de julio y, el 05 de noviembre, todos del año 2024, según consta en la sentencia recurrida.

**II.-** Se **aprueba** en lo consultado y se **confirma**, en lo demás, el referido fallo.

En lo que dice relación con la pena sustitutiva, **la decisión se adopta con el voto en contra de la ministra señora González y el abogado integrante señor Gandulfo**, quienes estuvieron por confirmar la sentencia en aquella parte, en virtud de sus propios fundamentos.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Tavolari y las disidencias de sus autores.

**Regístrese y devuélvase.**

**Rol N°236.784-2023.**

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por el Ministro Sr. Manuel Antonio Valderrama R., las Ministras Sras. María Teresa Letelier R. y Jessica González T., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavolari G. y Sr. Eduardo Gandulfo R. Santiago, 02 de mayo de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO  
Fecha: 02/05/2025 14:09:43

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER  
RAMIREZ  
MINISTRA  
Fecha: 02/05/2025 14:09:43



JESSICA DE LOURDES GONZALEZ  
TRONCOSO  
MINISTRA  
Fecha: 02/05/2025 14:34:24

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 02/05/2025 14:09:44

EDUARDO NELSON GANDULFO  
RAMIREZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 02/05/2025 14:09:44



En Santiago, a dos de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

